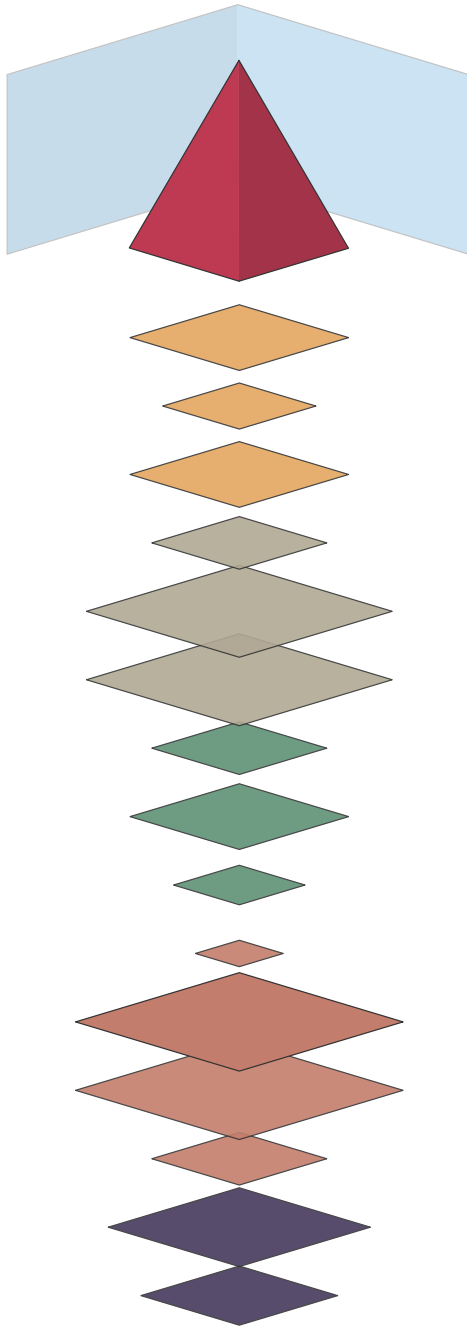


ARGENTINA



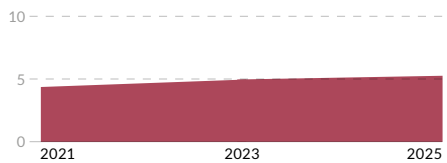
5.25 \nearrow 0.25

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

85.º de 193 países \nearrow 10

19.º de 35 países americanos \nearrow 2

9.º de 12 países de América del Sur -



MERCADOS CRIMINALES 5.00 \nearrow 0.50

TRATA DE PERSONAS	5.00	0.00
TRÁFICO DE PERSONAS	3.50	0.00
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	5.00	0.00
TRÁFICO DE ARMAS	4.00	\nearrow 0.50
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	7.00	0.00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	7.00	\nearrow 0.50
DELITOS CONTRA LA FLORA	4.00	\nearrow 2.00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	5.00	\nearrow 1.00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	3.00	\nearrow 0.50
COMERCIO DE HEROÍNA	2.00	0.00
COMERCIO DE COCAÍNA	7.50	\nearrow 0.50
COMERCIO DE CANNABIS	7.50	0.00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	4.00	\nearrow 1.00
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	6.00	\nearrow 0.50
DELITOS FINANCIEROS	4.50	\nearrow 1.00



ACTORES CRIMINALES 5.50 0.00

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	5.00	0.00
REDES CRIMINALES	6.00	0.00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	6.00	0.00
ACTORES EXTRANJEROS	5.50	0.00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	5.00	0.00



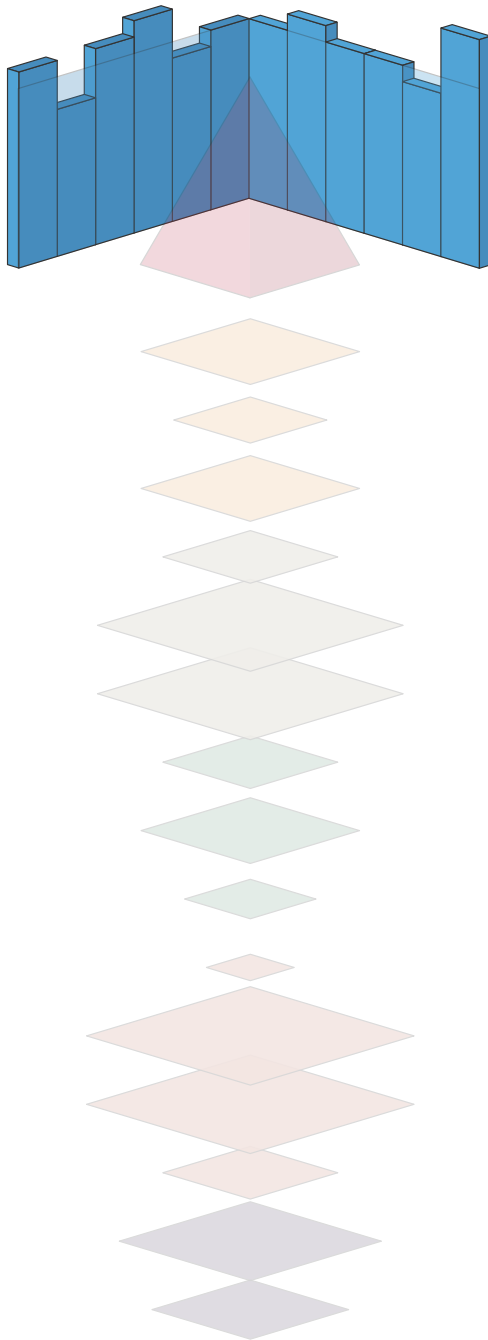
Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by
the European Union

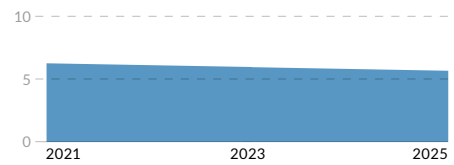
ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

 **ARGENTINA**



 **5.67** $\searrow 0.29$
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

44.º de 193 países $\searrow 5$
6.º de 35 países americanos -
3.º de 12 países de América del Sur -



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	6.00	$\searrow 0.50$
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4.50	0.00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6.00	0.00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6.50	$\nearrow 0.50$
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	5.00	$\searrow 0.50$
CUERPOS DE SEGURIDAD	5.50	0.00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5.50	$\searrow 0.50$
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	6.00	$\nearrow 1.00$
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	5.50	$\searrow 0.50$
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5.50	$\searrow 0.50$
PREVENCIÓN	5.00	0.00
ACTORES NO ESTATALES	7.00	$\searrow 0.50$



Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Argentina es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas. La mayoría de los casos registrados se concentran en Buenos Aires, pero la trata también se da en otras provincias. Las redes de trata operan tanto a nivel nacional como internacional, a menudo con la complicidad de actores integrados en el Estado. Entre las víctimas se encuentran ciudadanos argentinos y personas procedentes de América Latina, las islas del Caribe, China y Corea del Sur, con grupos vulnerables, como los trabajadores de supermercados sometidos a servidumbre por deudas, las personas transgénero explotadas sexualmente y las personas engañadas con falsas oportunidades en el mundo de la moda o el de los clubes deportivos. Los traficantes utilizan cada vez más las redes sociales para reclutar víctimas, mientras que las transacciones en efectivo complican la supervisión financiera. El aumento de las denuncias de trata de personas puede ser una señal de mayor concienciación, más que de un aumento real de los casos.

El país también es un lugar de tránsito y de destino para el tráfico de personas y la migración irregular representa una parte significativa del total de la inmigración. Si bien muchas personas cruzan las fronteras porosas de Argentina de forma independiente, las redes organizadas de tráfico de personas, en particular los grupos con sede en el extranjero, son cada vez más activas. El panorama delictivo del país incluye a grupos chinos de tipo mafioso, que trafican con ciudadanos chinos y a menudo los explotan laboralmente, y a redes venezolanas, que facilitan las rutas migratorias en todo el continente. La decadencia económica ha reducido los nuevos flujos migratorios y ha llevado a muchos migrantes a regresar a sus países de origen.

La extorsión y los cobros ilegales por protección son moderadamente frecuentes en Argentina, especialmente en Rosario y en el Gran Buenos Aires, y hay indicios de que se están extendiendo. Predominan los grupos locales, aunque algunas extorsiones están vinculadas a organizaciones criminales chinas. La extorsión y los cobros ilegales por protección han aumentado desde el 2020, con individuos armados, incluidos menores, que extorsionan a empresas. Los grupos más grandes se centran en los sindicatos, los financieros y las agencias de apuestas y a menudo operan desde las prisiones, donde la corrupción interna facilita sus actividades. El creciente cambio del tráfico de drogas a la extorsión se debe a las menores exigencias logísticas, así como a la corrupción en los cuerpos de seguridad y las prisiones, lo que dificulta los esfuerzos del Estado para controlar estos delitos.

TRÁFICO

Argentina funciona como un país de tránsito clave para el tráfico de armas y facilita el movimiento de armas, principalmente desde países europeos, como Serbia, la República Checa y Eslovenia, así como desde Turquía a través de Paraguay, hacia grupos brasileños, como Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho. Anteriormente, las piezas de las armas procedentes de Estados Unidos pasaban por Argentina de camino hacia Europa, antes de ser reensambladas y reexportadas, pero, según fuentes recientes, ha habido un cambio hacia orígenes principalmente europeos. Al parecer, la prohibición de importar armas de Paraguay en el 2018 provocó la expansión de rutas alternativas de contrabando a través de Argentina. También se ha observado un tráfico de armas a menor escala hacia Chile, posiblemente relacionado con el empeoramiento de la seguridad y con las redes del crimen organizado. Según los informes, los grupos de resistencia mapuches podrían estar involucrados en el tráfico de armas relacionado con actividades de tráfico de drogas o de trata de personas en Mendoza (Argentina). Las investigaciones también ponen de relieve la participación de empresas argentinas y de actores integrados en el Estado en el tráfico de armas y en particular en el flujo de armas entre Europa y Brasil.

Argentina es uno de los principales mercados de productos falsificados de América Latina. El país importa grandes cantidades de productos de este tipo, sobre todo de China, de Bolivia y de Paraguay, la mayoría de los cuales se producen en China e India. Este comercio está dominado por redes criminales poco estructuradas, que a veces se dedican a la fabricación local. La falsificación afecta a las marcas de artículos de lujo y de ropa deportiva, en particular a los relojes y la ropa. Argentina sigue siendo un importante importador de medicamentos falsificados, con predominio de las compras en línea. Han aumentado las incautaciones de recambios de automóviles y de piezas industriales falsos, así como de productos agroquímicos, a menudo con destino a Brasil.

El comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, como el alcohol, el tabaco y los cereales, está muy extendido en Argentina, como origen y también como destino. Las incautaciones son frecuentes, sobre todo en la región de la triple frontera, donde las redes de contrabando operan con fluidez. Los contrabandistas ocultan las mercancías en camiones y muebles y utilizan las ciudades fronterizas como puntos de tránsito hacia Brasil y Paraguay. Es posible que el contrabando se cruce con otros mercados ilícitos, pero los datos son escasos. Argentina se encuentra entre los países con mayor número de incautaciones de tabaco. Los cigarrillos ilícitos se envían al extranjero, en particular a mercados que dan un alto margen, como Australia. La demanda interna de cigarrillos baratos alimenta el comercio ilícito local. En informes anteriores se señalaba la exportación

de tabaco a Paraguay, para transformarlo en cigarrillos y volver a importarlo, pero se carece de datos recientes. De este comercio se benefician tanto los actores nacionales como los extranjeros.

MEDIOAMBIENTE

La zona de la triple frontera sigue siendo un punto conflictivo para la tala ilegal, en la que participan múltiples redes criminales y que se coordina a nivel internacional. Las operaciones de los cuerpos de seguridad llevadas a cabo en el 2024 descubrieron redes criminales y varias empresas involucradas en la tala ilegal, el fraude documental y el tráfico de madera a lo largo de la frontera entre Brasil y Argentina, una región conocida por sus actividades ilícitas transfronterizas, lo que dio lugar a la incautación de importantes cantidades de madera valiosa. En Argentina también hay varias especies endémicas de cactus y suculentas, muy codiciadas por los coleccionistas de todo el mundo. Esta demanda ha dado lugar a casos de recolección y exportación ilegales.

Argentina desempeña un papel multifacético en el tráfico de especies silvestres y actúa como país de origen, tránsito y destino. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es un problema grave, ya que hay buques extranjeros, en particular de China y de España, que violan con frecuencia la zona económica exclusiva de Argentina y desactivan los sistemas de seguimiento. Esta actividad ilícita, que se centra especialmente en el calamar, provoca pérdidas económicas considerables y amenaza la biodiversidad marina y a las comunidades locales que dependen de la pesca. El contrabando de especies silvestres incluye tanto especies de origen nacional como importadas y los animales que se trafican se transportan por tierra, mar y aire a mercados de Estados Unidos, Europa y Asia Occidental. En Argentina también hay una fuerte demanda interna de mascotas exóticas y hay especies en peligro de extinción que se venden mucho en los centros urbanos. Entre las especies más traficadas se encuentran aves, tortugas, monos y felinos. También se han descubierto y rescatado en Argentina animales africanos y asiáticos, como tigres de Bengala, avestruces, iguanas de Fiji y cobras.

Los delitos contra los recursos no renovables en Argentina incluyen el robo de cobre, el contrabando de gasolina y la subfacturación de las exportaciones de litio, todos impulsados por los incentivos económicos y las lagunas normativas. El robo de cobre es frecuente en las zonas urbanas, está vinculado a las redes criminales y cada vez involucra a más personas que pasan por dificultades económicas. El contrabando de gasolina, impulsado por las disparidades de los precios, ha aumentado considerablemente, especialmente hacia Paraguay y Brasil, que han expresado su preocupación por su impacto económico. La subfacturación del litio por parte de las grandes empresas ha dado lugar a acciones legales y las autoridades han descubierto tácticas que privan a

Argentina de ingresos. Las labores de supervisión se ven aún más complicadas por los problemas de transparencia en la gobernanza provincial.

DROGAS

Argentina es un centro de tránsito clave para la cocaína procedente de Bolivia y de Perú, que abastece el creciente consumo interno y llega a Europa como mercado principal. Debido a unos controles más estrictos, las rutas tradicionales de tráfico se han desplazado hacia puertos no tradicionales, como Buenos Aires y Montevideo, mientras que persisten el contrabando terrestre a través de Salta y el transporte aéreo desde Bolivia. Rosario, con su puerto fluvial sobre el río Paraná, sigue siendo un importante centro de redistribución. El tráfico regional de cocaína está controlado en gran medida por grupos internacionales de tipo mafioso, mientras que las bandas locales rosarinas, como Los Monos y Alvarado, se encargan de la distribución interna. Estas bandas están involucradas en diversos delitos y a menudo se enfrentan por el control del territorio, lo que alimenta la violencia, especialmente en Rosario. El área metropolitana de Buenos Aires es también un centro clave para el crimen organizado, ya que allí operan varios grupos más pequeños, pero poderosos. En ambas ciudades, estos grupos actúan con la complicidad de las fuerzas de seguridad y las autoridades. Mientras tanto, crece la preocupación por la presencia del PCC brasileño en el país. A pesar del aumento de la demanda interna, el comercio de cocaína en Argentina sigue centrado en la exportación. Algunos actores locales procesan la base de coca para convertirla en cocaína.

El tráfico de cannabis se está expandiendo, debido al aumento de la demanda de la droga más consumida en el país. Argentina tiene uno de los índices de consumo de cannabis más altos de América del Sur, muy por encima de la media regional. El mercado interno, valorado en cientos de millones de dólares anuales, es abastecido en gran medida por Paraguay, el principal productor de la región, y una parte también se trafica hacia Chile. El consumo se ha disparado en la última década, lo que ha fomentado el crecimiento del sector de la producción local, sobre todo a través del cultivo en interiores. La distribución está controlada por bandas locales, a menudo con violentas disputas territoriales y la connivencia de las fuerzas de seguridad.

El mercado de las drogas sintéticas de Argentina, aunque más pequeño que el de la cocaína y el cannabis, está creciendo, especialmente entre los adultos jóvenes en los locales nocturnos. La MDMA es la más prevalente, de origen local e internacional, y las importaciones holandesas son bastante más caras. Ha aparecido el tusi, un derivado de la ketamina, pero sigue siendo minoritario. Aunque se sintetiza cierta cantidad de metanfetamina, la mayor parte del consumo ilícito corresponde a las anfetaminas farmacéuticas. Se importa LSD y el fentanilo es poco frecuente. Aunque a veces coinciden con el de la cocaína y el cannabis, los mercados de las drogas sintéticas siguen siendo bastante peculiares.

Las autoridades han incautado grandes cantidades de MDMA, pero en este mercado, sumamente adaptable, a menudo aparecen sustancias nuevas. Impulsan el comercio unas redes fragmentadas y los mensajeros aéreos y se han desarticulado algunas operaciones internacionales.

El tráfico de heroína en Argentina sigue siendo poco frecuente y no es demasiado preocupante. Su presencia se detecta en incidentes ocasionales. Aunque el origen de la droga es incierto, es probable que el país solo funcione como lugar de tránsito.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

En los últimos años, la ciberdelincuencia ha aumentado bastante en Argentina, debido a los ataques de ransomware, de malware y a los distribuidos de denegación de servicio y al fraude con criptomonedas. Las redes de ciberdelinquentes nacionales e internacionales, incluidos algunos grupos sofisticados, han atacado a instituciones públicas, bancos y empresas. La frecuencia y la complejidad de los ataques se han intensificado y se han dirigido ciberataques avanzados y persistentes contra entidades gubernamentales y diplomáticas. La criptominería no autorizada, impulsada por la electricidad subvencionada, ha dado lugar a medidas coercitivas. Las infracciones de alto nivel, como el robo de los datos nacionales de identidad y el pirateo de las nóminas de los aeropuertos, demuestran que hay vulnerabilidades en los sistemas públicos.

DELITOS FINANCIEROS

Están aumentando los delitos financieros en Argentina, en particular el fraude en línea, el phishing y la evasión fiscal. Las fuentes sitúan al país en el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a evasión fiscal, con una elevada presión fiscal que impulsa esta actividad ilícita. El fraude, predominantemente a través de Internet, ha aumentado mucho en los últimos años y el robo de identidad y el phishing se han vuelto más frecuentes. Las estafas más comunes implican perfiles falsos en las redes sociales y la suplantación de identidad en bancos o instituciones, lo que debilita la confianza en las entidades financieras. Los autores suelen formar parte de redes nacionales poco organizadas. Los factores estructurales de la economía también ayudan a que persistan estos retos.

ACTORES CRIMINALES

El panorama del crimen organizado en Argentina está dominado por grupos de tipo mafioso de tamaño medio, que operan sobre todo a nivel local. A menudo se trata de clanes familiares que ejercen un control territorial en los barrios y utilizan la coacción y la integración en la comunidad para mantener su influencia. Destacan algunas organizaciones, como las de Rosario y las regiones fronterizas, que se dedican al tráfico de drogas y de armas, al lavado de dinero y al contrabando. Gozan de protección judicial y política y siguen operando incluso desde la cárcel, a través de redes

corruptas. Las violentas disputas territoriales, en particular por la distribución de drogas, provocan elevadas tasas de homicidios, especialmente en Rosario.

Las redes criminales siguen estando muy involucradas en el tráfico de drogas. Este tipo de grupos distribuye cocaína y marihuana en los centros urbanos y procesa la base de coca para convertirla en cocaína, con operaciones de microtráfico concentradas en asentamientos informales, donde las intervenciones de los cuerpos de seguridad son frecuentes. Si bien las zonas fronterizas sirven como centros claves para el contrabando internacional, las estructuras de las redes siguen estando descentralizadas. Los grupos nacionales involucrados en los productos falsificados, los delitos contra las especies silvestres y los relacionados con los recursos no renovables mantienen vínculos con sus homólogos extranjeros, lo que facilita el comercio ilícito transnacional. A pesar de la magnitud de estas operaciones, los niveles de violencia siguen siendo relativamente bajos. Buenos Aires es la base principal de las organizaciones delictivas, lo que refleja el papel de la ciudad como centro neurálgico de las actividades ilícitas, tanto locales como internacionales.

Argentina se enfrenta a vulnerabilidades sistémicas en los cuerpos de seguridad, la política y el Poder Judicial, que facilitan el crimen organizado y en particular el tráfico de drogas. La corrupción es frecuente a nivel municipal y provincial y las fuerzas de seguridad, el personal penitenciario y los políticos están implicados en actividades delictivas.

Se ha acusado a agentes de la Policía de inventar pruebas para manipular los conflictos relacionados con las drogas, de colaborar con las organizaciones criminales y de proporcionar información confidencial a grupos violentos. Se supone que algunas redes criminales de alto nivel, como Los Monos y Los Gordos, mantienen conexiones políticas y judiciales para garantizar su protección y unas sentencias poco severas. Se ha arrestado a funcionarios locales, incluidos algunos alcaldes, por participar en el tráfico de drogas. Las denuncias de corrupción a alto nivel, incluidas las acusaciones de lavado de dinero y de soborno, vinculadas a contratos públicos, ilustran aún más la vulnerabilidad de Argentina al crimen organizado.

El panorama del crimen organizado en el país está dominado en gran medida por los grupos locales, aunque hay actores extranjeros, sobre todo de Bolivia y de Paraguay, que participan en el tráfico de armas y tienen algunos vínculos con los clanes criminales nacionales. La influencia extranjera es más pronunciada en las regiones fronterizas del norte, cerca de Brasil y de Paraguay. La mafia china opera en Buenos Aires y se dedica sobre todo a la extorsión y hay buques chinos implicados en la pesca ilegal en aguas argentinas. Preocupa que entren en Argentina grupos brasileños, como el PCC, pero las entidades extranjeras aún no han logrado un control significativo de los mercados criminales. La desregulación económica, la corrupción y la escasa aplicación de la ley contra el lavado de dinero hacen de Argentina un refugio

atractivo para delincuentes destacados de Colombia y de Ecuador, que tratan de huir de la justicia, y algunos de los cuales han sido deportados hace poco.

En Argentina, los actores del sector privado contribuyen a la economía ilícita, en particular al contrabando de productos sujetos a impuestos especiales y de productos falsificados. Según se informa, hay figuras del mundo empresarial involucradas en el tráfico de tabaco procedente de Brasil y de Paraguay, que se procesa legalmente en Argentina y se reintroduce en el mercado nacional. Se sospecha que las empresas de transporte facilitan el contrabando. Los

exportadores agrícolas de productos básicos, como el maíz y la soja, a veces participan en el contrabando, aprovechando artimañas financieras, como la subfacturación, para evadir impuestos, al tiempo que combinan el comercio legal con el ilegal. Los organismos reguladores han investigado a las principales empresas implicadas en estas prácticas, lo que ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades sistémicas en la supervisión y la aplicación de la ley, que permiten que el crimen organizado opere dentro de estructuras empresariales legítimas.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Argentina es una democracia, pero la desconfianza de la ciudadanía en el Estado afecta a la participación electoral, que recientemente ha alcanzado su nivel más bajo desde el retorno a la democracia, en 1983. La integridad electoral varía en cada provincia. La corrupción, la inflación y la inseguridad siguen debilitando la confianza en las instituciones y las encuestas indican un escepticismo generalizado hacia el Gobierno, el Poder Judicial y la Policía. Sigue habiendo mucha inestabilidad política, ya que la actual administración se enfrenta a la resistencia de los sindicatos y la oposición del Poder Legislativo. El crimen organizado también ha sido un tema político importante y tanto la administración anterior como la actual han abogado por medidas enérgicas. El Gobierno actual ha propuesto utilizar al Ejército para reprimir la delincuencia y reformar el sistema penitenciario, pero los detalles aún no se han concretado. Estos cambios, sumados a las constantes dificultades económicas y al aumento de la pobreza, alimentan el descontento de la población.

Persisten los retos en la lucha contra la corrupción, debido a las deficiencias institucionales y a la percepción de injerencia política. Se critica al Poder Judicial por su falta de independencia y se considera que la oficina anticorrupción está influida políticamente. Las acusaciones de corrupción abarcan a todos los partidos políticos, como lo demuestran los casos de fraude de gran repercusión. Aunque se está tratando de lograr transparencia a nivel federal, la supervisión municipal sigue siendo débil. Argentina comunica internacionalmente los datos sobre criminalidad y corrupción y cuenta con una estrategia nacional de integridad, pero las recientes propuestas del Gobierno carecen de un enfoque estructurado y los avances en la lucha contra la corrupción son inconsistentes.

El país participa activamente en los esfuerzos internacionales para combatir el crimen organizado, mediante la cooperación multilateral, la adhesión a convenios internacionales y el intercambio de información. Participa en importantes

operaciones de INTERPOL contra los mercados criminales, como el tráfico de armas y de drogas y la explotación infantil. Colabora con socios regionales en iniciativas contra la trata y el contrabando y desempeña un papel clave en el Comité Latinoamericano de Seguridad Interna. Unos cuerpos de seguridad especializados, entre ellos un grupo de trabajo antimafia vinculado a las autoridades italianas, se ocupan de las organizaciones delictivas transnacionales. Argentina tiene numerosos acuerdos de extradición y ha ratificado los tratados de las Naciones Unidas sobre el crimen organizado, la fiscalización de las drogas, el comercio de armas y la corrupción, que forman parte de su legislación nacional.

El marco jurídico integral del país para el crimen organizado abarca la trata de personas, el tráfico de drogas y de armas, el blanqueo de capitales, la extorsión, la ciberdelincuencia y las violaciones de la propiedad intelectual. Se están llevando a cabo reformas del Código Penal para modernizar las leyes sobre ciberdelincuencia y también hay una propuesta de actualizar la legislación sobre protección de datos, para hacer hincapié en los derechos individuales. En el 2024, el país aplicó su Ley de Responsabilidad Penal Corporativa en un caso de soborno de gran repercusión, que puso de manifiesto fallos en la gobernanza. Argentina aplica leyes contra los productos falsificados y el comercio ilícito y en el 2023 actualizó su código aduanero. Las autoridades han reforzado los controles al comercio de drogas sintéticas, como el fentanilo.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial argentino funciona a nivel federal y provincial, con unidades especializadas que se ocupan del crimen organizado. Sin embargo, la corrupción afecta la honestidad de los jueces, especialmente en los tribunales provinciales. La confianza de la ciudadanía es baja y una proporción significativa considera que el sistema es ineficaz, debido a las elevadas tasas de impunidad. Una propuesta de reforma judicial para modificar el proceso de nombramiento

de los jueces fracasó en el Congreso. El sistema penitenciario está gravemente superpoblado y las condiciones son cada vez peores, con lo cual las familias de los reclusos se ven obligados a proporcionarles los artículos de primera necesidad. Los delitos relacionados con las drogas han incrementado los índices de encarcelamiento y la prisión preventiva sigue siendo una práctica generalizada. La corrupción permite la actividad delictiva dentro de las prisiones, incluida la extorsión. Las fugas de la prisión han aumentado, al incrementarse la cantidad de detenidos. Las reformas propuestas incluyen la reducción de la edad de responsabilidad penal, así como la semiprivatización de las prisiones, para reducir los costes del Estado.

Las fuerzas de seguridad están compuestas por unidades policiales federales, provinciales y municipales. La Policía Federal opera en todo el país, junto con los organismos especializados. También se han creado instituciones centradas en la ciberdelincuencia y brigadas de protección del medioambiente. La Policía provincial se encarga de la mayoría de las funciones de los cuerpos de seguridad y algunas ciudades cuentan con fuerzas municipales. A pesar de la elevada proporción de policías por habitante, el crimen organizado pone a prueba a los cuerpos de seguridad. Los esfuerzos para combatir el tráfico se ven reforzados por la cooperación internacional, pero persisten las deficiencias en la lucha contra el narcotráfico. La corrupción, la conducta indebida de la Policía, las violaciones de los derechos humanos y las deficiencias en la gestión de los casos de violencia de género son motivos de preocupación.

Argentina se enfrenta a importantes retos relacionados con la seguridad fronteriza, el crimen organizado y las amenazas cibernéticas. Las extensas fronteras terrestres del país, en gran parte no reguladas, facilitan el contrabando y el tráfico de drogas, especialmente a lo largo de sus límites septentrionales con Bolivia, Paraguay y Brasil. La región de la triple frontera es un punto conflictivo para las actividades de contrabando y el Paraná y otros ríos sirven como rutas claves para el tráfico de drogas. La pesca ilegal, especialmente por parte de buques extranjeros, ha provocado un aumento de las patrullas en las zonas marítimas. El Gobierno ha reforzado la seguridad fronteriza y portuaria mediante iniciativas tecnológicas, como radares, escáneres y la modernización de la logística portuaria, basada en la cadena de bloques, aunque su eficacia es incierta. Las vulnerabilidades en materia de ciberseguridad son especialmente persistentes en el sector privado, que carece de medidas de protección generalizadas. El Gobierno está tratando de mejorar la ciberseguridad, mediante la cooperación internacional, la mejora de las infraestructuras y algunas estrategias nacionales. Se ha presentado un plan para hacer frente a los delitos tecnológicos, pero el marco jurídico sigue siendo obsoleto y los delitos cibernéticos no paran de aumentar.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Argentina se enfrenta a continuos retos en materia de lucha contra el lavado de dinero, agravados por un amplio sector informal y una economía con un elevado uso de efectivo. Algunos mercados informales de cambio de divisas proporcionan vías para los flujos financieros ilícitos. Las organizaciones criminales locales y las internacionales, como los cárteles mexicanos, explotan estas vulnerabilidades. A pesar de la legislación contra el lavado de dinero y de que el país pertenece al Grupo de Acción Financiera Internacional desde el 2000, la aplicación de la ley es débil, con pocas condenas y con mecanismos ineficaces de incautación de activos. La inexperiencia judicial y la deficiente coordinación entre los organismos dificultan aún más su eficacia. Argentina coopera a nivel internacional, en particular con Estados Unidos, y ha ampliado su normativa para hacer frente a los riesgos de las criptomonedas. Sin embargo, las reformas propuestas por la actual administración han suscitado preocupación por la relajación de la supervisión, las posibles amnistías fiscales y la disminución de la diligencia debida por parte de las instituciones financieras.

El país se enfrenta a una grave inestabilidad económica, con una inflación elevada, mucha pobreza y grandes retos políticos. En el 2024 se declaró el estado de emergencia, cuando la inflación alcanzó casi el 290 % y la pobreza superó el 50 %, lo que provocó protestas y la dependencia de la ayuda humanitaria. El uso de las criptomonedas creció en medio de la inestabilidad monetaria, aunque el Banco Central prohibió las transacciones en los bancos. Con la supervisión del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno persigue la desregulación y la privatización, pero los problemas legales frenan la reforma y los recortes de austeridad afectan los programas sociales.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Argentina ha establecido un marco general para apoyar a las víctimas de la trata, a las que ofrece apoyo psicológico y jurídico y asistencia médica y social desde el momento del rescate y durante los procedimientos judiciales. Las víctimas reciben una indemnización procedente de los activos incautados y las autoridades mantienen un registro de asistencia a las víctimas y una guía de referencia para las oficinas locales de lucha contra la trata. El Gobierno ha aumentado las condenas por trata y las iniciativas de apoyo a las víctimas, como la reinserción laboral y la vivienda. Sin embargo, las limitaciones financieras han retrasado la construcción de los refugios previstos y la complicidad oficial en la trata sigue siendo motivo de preocupación. El país también cuenta con un programa nacional de protección de testigos, para las personas que participan en investigaciones federales importantes, aunque la protección de los denunciantes y los testigos de la trata de personas sigue siendo insuficiente. La disolución, en el 2020, de la agencia nacional de protección de testigos debilitó las salvaguardias y los casos de corrupción carecen de un marco legal de protección de testigos. La política argentina contra las drogas incorpora el tratamiento

de la salud mental, pero su enfoque general obtiene una puntuación moderada en las evaluaciones mundiales. Los recientes recortes presupuestarios han debilitado considerablemente los programas de apoyo a víctimas y testigos y de derechos humanos y algunas iniciativas se han eliminado por completo.

Argentina ha implementado diversas estrategias para combatir el crimen organizado, entre ellas el Plan Federal contra el Crimen Organizado (2021-2023), cuyo objetivo es reforzar la seguridad fronteriza, combatir la ciberdelincuencia y mejorar las investigaciones sobre los delitos transnacionales. Las medidas para combatir la trata de personas incluyen campañas de sensibilización a nivel nacional e internacional y la coordinación con los sectores laborales. Las políticas en materia de drogas establecen la detención o el tratamiento por posesión, junto con iniciativas de prevención centradas en los grupos marginados. Además, en el 2024, el Gobierno argentino anunció la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial para prever y prevenir delitos, mediante el aprendizaje automático, drones, el reconocimiento facial y la supervisión de las redes sociales. Aunque el Gobierno afirma que mejorará la seguridad, los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por las posibles amenazas a la privacidad y la libertad de expresión y han instado a una mayor transparencia y rendición de cuentas en su aplicación.

Las organizaciones de la sociedad civil argentina operan con pocas restricciones y combaten activamente las diferentes formas del crimen organizado. Las ONGs colaboran con el Gobierno para apoyar a las víctimas de delitos y reintegrar la fauna silvestre incautada. La libertad de expresión está protegida por la ley, pero la propiedad de los medios de comunicación está muy concentrada en entidades con afiliación política. Aunque no hay una censura oficial, los periodistas se enfrentan a acosos, acciones legales y vigilancia, en especial cuando informan sobre la corrupción y los delitos relacionados con las drogas. Se ha acusado al Gobierno de vigilar a los periodistas y de elaborar perfiles ideológicos. Con la actual administración, el entorno mediático se ha vuelto cada vez más volátil, debido a la preocupación por la pluralidad de los medios de comunicación, a las presiones económicas y a la polarización política. La influencia del Gobierno y de las empresas, junto con la abierta hostilidad del actual Gobierno hacia la prensa, han aumentado los retos a la libertad de prensa.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.